

Venezuela 2001-2004: actores y estrategias en la lucha hegemónica	Titulo
Lopez Maya, Margarita - Autor/a	Autor(es)
Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina	En:
Buenos Aires	Lugar
CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales	Editorial/Editor
2006	Fecha
	Colección
Hegemonia; Poder Político; Estado; Historia; Conflictos Sociales; America Latina; Venezuela;	Temas
Capítulo de Libro	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101020012743/2PICuno.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)

Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)

www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences



MARGARITA LÓPEZ MAYA*

VENEZUELA 2001-2004: ACTORES Y ESTRATEGIAS EN LA LUCHA HEGEMÓNICA¹

EN VENEZUELA se viven tiempos convulsionados. En la sociedad se viene librando una lucha hegemónica entre actores reunidos en dos polos, que portan proyectos políticos sustancialmente distintos, y que hasta la fecha se perciben como excluyentes. Desde finales de 2001 estos actores entraron en una fase de la lucha caracterizada por la práctica de estrategias insurreccionales por parte de las fuerzas de oposición al gobierno. El objetivo ha sido la salida del presidente Hugo Chávez Frías de su cargo. Como resultado, en abril de 2002 se desarrolló un golpe de Estado de efímero éxito, y entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 se llevó a cabo un paro general que incluyó la paralización de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) por parte de su gerencia mayor, el cual también fracasó. Y más recientemente, en 2004, un *guarimbo* y un referendo revocatorio presidencial.

* Historiadora venezolana. Doctora en Ciencias Sociales, Profesora titular del CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales.

¹ Este artículo está basado en "Venezuela 2002-2003: tiempos de confrontación y violencia", elaborado para ser publicado en el anuario *Lateinamerika. Analysen und Berichte* (2004). Se ha actualizado y ajustado para su publicación en español.

En este artículo se describen y analizan estos sucesos para contribuir a sopesar la situación en que se hallan las fuerzas sociopolíticas que se confrontan en Venezuela. Para ello, este estudio se divide en cinco partes. Primeramente, se presentan algunos elementos contextuales de naturaleza internacional y nacional que enmarcan el conflicto venezolano. Segundo, se describe y analiza el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Tercero, se examinan los elementos principales que llevaron a la huelga general con paro de la industria petrolera, el desarrollo del paro mismo y sus primeros resultados políticos. Cuarto, se detalla y analiza el proceso sociopolítico de los meses siguientes al paro que fue crecientemente girando en torno a un proceso revocatorio presidencial y de diputados de la Asamblea Nacional. En quinto lugar indagamos el *guarimbo* de febrero de 2004 y el acto del referendo revocatorio presidencial realizado el 15 de agosto de 2004. Se concluye con una recapitulación y una primera evaluación del estado actual de la lucha hegemónica en Venezuela.

El enfoque conceptual que se utiliza se sitúa dentro de la tradición gramsciana, entendiendo por lucha hegemónica las confrontaciones que tienen lugar entre actores sociales y políticos, que buscan por medio de la interacción articular un proyecto sociopolítico que alcance legitimidad y predominio en la sociedad, al mismo tiempo que asegure sus intereses particulares (Laclau, 1985). Esa lucha en su desenvolvimiento va constituyendo a los actores mismos, que se van transformando en su relación con los otros, a la par que van construyendo y modificando incesantemente ese proyecto sociopolítico que busca la hegemonía. El concepto de hegemonía gramsciano expresa bien la intensa fluidez de interacciones que se dan en la confrontación política en cualquier sociedad dada. En el caso venezolano resulta especialmente pertinente por la intensidad –incluso hasta el desbordamiento– con que la lucha política se desarrolla en la historia reciente.

La lucha entre actores que se viene librando desde 2001 ha sido especialmente intensa y violenta, por hallarse los actores en pugna polarizados en ópticas y objetivos percibidos por ellos como excluyentes. Los actores que lideran los polos en confrontación vienen ejerciendo una política de *clase*, es decir, ejerciendo discursos y prácticas orientadas por lineamientos que han reforzado identidades y solidaridades de clase, produciendo la colocación de sectores sociales organizados de ingresos altos y medios predominantemente en el polo de la oposición, mientras los sectores populares en su mayoría se identifican con el proyecto bolivariano del gobierno². En el desarrollo de estos años, muchos actores se han ido organizando crecientemente, transformando y/o per-

2 La política venezolana actual (y su sesgo de lucha de clases) ha sido desarrollada en varios capítulos de Ellner y Hellinger (2003).

filando sus identidades con más nitidez que en el pasado y evidenciando un fortalecimiento de la dimensión de eficacia en sus acciones. Esto es especialmente cierto entre diversos sectores populares que, a diferencia de los sectores medios que venían en procesos de organización desde décadas anteriores, al comienzo del gobierno de Chávez se caracterizaban por deficiencias notables en organización y dinamismo.

Forman parte de las fuerzas de la oposición un conjunto muy diverso de organizaciones sociales y políticas que, desde inicios de 2001, han ido creciendo y desarrollando una acción común bajo la coordinación de una organización paraguas llamada la Coordinadora Democrática de Acción Cívica, más conocida hoy como la Coordinadora Democrática (CD). En distintos momentos de la fase bajo estudio, se han alternado distintos actores en el liderazgo de la CD: desde el sector empresarial organizado en FEDECÁMARAS, que lideró las primeras acciones que desembocaron en el golpe de Estado, hasta partidos políticos como Acción Democrática (AD) o Primero Justicia que han sido más visibles en otras etapas, pasando por sindicatos de trabajadores públicos, gerentes petroleros organizados y otras organizaciones sociales constituidas por sectores sociales de ingresos medios y altos, que se identifican como la *sociedad civil*. A lo largo de la fase, los medios privados de comunicación, como sector empresarial particular, actuando con altos niveles de cohesión entre sí, ejercieron una influencia considerable sobre las decisiones y acciones de este polo. Usando su enorme poder mediático, trascendieron su rol de mediadores de la información de interés público para trastocarse en actor político de decisiva influencia dentro de la CD.

En el polo opuesto, las organizaciones políticas que apoyan al gobierno de Chávez son un conjunto de partidos políticos con poca institucionalización, que han tratado a lo largo de estos años diversas formas de alianza y coordinación, desde el Comando Táctico de la Revolución hasta el más reciente Comando Maisanta en el referendo revocatorio presidencial de agosto de 2004. El partido más numeroso es el Movimiento Quinta República (MVR), la organización política del presidente, siguiendo el Patria Para Todos (PPT) y otras organizaciones como el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Podemos (un desprendimiento del MAS), etcétera. También en este polo se aglutinan un abanico de organizaciones sociales, principalmente de sectores de ingresos bajos y medios, que se han venido constituyendo de manera creciente a lo largo de la fase. Actúan a veces por su cuenta, a veces coordinadas o articuladas a las estructuras partidarias o de coordinación política. Entre ellas pueden mencionarse: círculos bolivarianos, comités de tierras urbanas, organizaciones populares, cooperativas, sindicatos, mesas técnicas de agua, comités de salud, las clases media en positivo, y otros.

LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DEL CONFLICTO VENEZOLANO: CHÁVEZ Y SU PROYECTO CONTRAHEGEMÓNICO³

Los hechos dramáticos que sacuden a la sociedad venezolana en años recientes tienen lugar en un escenario de crisis integral que se viene padeciendo por más de dos décadas. Esta crisis responde tanto a un conjunto de determinaciones nacionales como a condicionamientos vinculados con factores y procesos que se originan en los cambios ocurridos en el ámbito internacional como producto de los procesos de globalización neoliberal.

En su dimensión internacional, la crisis venezolana se vincula con los cambios en las relaciones de los países capitalistas centrales con la periferia, que se visibilizaron desde fines de los años setenta y que tuvieron en la *crisis de la deuda*, que asoló a América Latina en los años ochenta, una de sus expresiones más dramáticas. La economía venezolana vivió su *viernes negro* en 1983, cuando el Estado se declaró en moratoria, convirtiéndose en el cuarto país más endeudado del continente y acentuándose el proceso de desorientación y estancamiento de su economía, que persiste hasta la actualidad. Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, los distintos gobiernos venezolanos desde entonces han venido aplicando de manera heterodoxa u ortodoxa programas de reajuste y reestructuración económica, *paquetes* que encontraron enormes resistencias en las fuerzas sociales y políticas del país (López Maya y Lander, 2000; Stephany, 2001). Tanto en 1988, como en 1993 y en 1998, los candidatos que alcanzaron la Presidencia de la República lo hicieron ofreciendo un modelo económico antineoliberal como salida de esta crisis. Sin embargo, sólo el presidente Chávez ha sostenido en el tiempo su promesa electoral, y su gobierno ensaya desde 1999 una propuesta en varios aspectos alternativa a las indicaciones recomendadas por las agencias internacionales de financiamiento a los países fuertemente endeudados.

El proyecto político del presidente Chávez y su alianza de fuerzas políticas, con todas sus contradicciones, debilidades e inconsistencias, se ha orientado desde sus inicios por algunas concepciones que contradicen en teoría y praxis social y política la doctrina neoliberal, así como las relaciones de poder mundial que este pensamiento legítima (Edgardo Lander, 2004). Sus líneas generales se expresan en la Constitución de 1999 y en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. Entre otros aspectos medulares, la Constitución mantiene el rol central del Estado como regulador y supervisor de las actividades económicas; reasienta la universalidad de los dere-

3 En esta parte se toman extractos de López Maya (2003b: 140-148).

chos sociales, así como el deber del Estado de desarrollar los mecanismos necesarios para garantizarlos; reconoce además de la propiedad privada individual, otras formas alternas de propiedad de naturaleza comunitaria y solidaria; y ratifica la propiedad estatal del recurso petrolero. Ambos documentos establecen las orientaciones de una *democracia participativa y protagónica*, entendida como la combinación de las modalidades de la democracia representativa con democracia directa o profunda. En términos de política exterior, el gobierno de Chávez ha enfatizado, a contracorriente de la propuesta ALCA liderada por EE.UU., la integración latinoamericana y caribeña como norte de sus relaciones económicas internacionales, la solidaridad “con los pueblos en la lucha por su emancipación”, la mayor democratización de agencias y organismos internacionales (Romero et al., 2003: 163-184) y la búsqueda de un mundo multipolar para equilibrar los grandes poderes mundiales entre sí, sobre todo para contrarrestar el peso de EE.UU. También ha vuelto a la disciplina y acción conjunta con los países productores de petróleo organizados en la OPEP, una organización que Venezuela ayudó a fundar en los años sesenta y de la cual se venía retrayendo. Por estos y otros motivos, el gobierno de Chávez ha sido identificado como parte del heterogéneo movimiento de resistencia antineoliberal mundial que ha venido creciendo en fuerza y organización en los años recientes⁴.

En su dimensión nacional, la crisis venezolana responde a una causalidad compleja, que se ha tejido en la dinámica de procesos sociohistóricos y sociopolíticos que poseen distintas temporalidades y que en muchas de sus líneas básicas son comunes al resto de las sociedades latinoamericanas. Además de las secuelas de la exclusión social histórica generadas por modelos coloniales o semi coloniales implantados en la sociedad a lo largo de su existencia, ya son, desde la crisis de la deuda, más de dos décadas de recesión económica y empobrecimiento social las que se han sufrido. En los últimos 20 años, el empobrecimiento en Venezuela ha sido brutal, creciente y sostenido, medido con cualquiera de los indicadores comúnmente usados para evaluar la situación socioeconómica de una sociedad (Rey, 2004; López Maya y Lander, 2000; Roberts, 2003).

Este empobrecimiento ha conllevado una polarización social creciente, producto tanto de los procesos antes señalados como de la aplicación durante las últimas dos décadas de políticas económicas neoliberales regresivas en términos de distribución del ingreso (López Maya y Lander, 2000). Los venezolanos pobres y empobrecidos han per-

4 Para una panorámica general del movimiento de resistencia a la mundialización neoliberal ver OSAL (2001; 2002). Para los puntos de desencuentro del gobierno venezolano con EE.UU. ver Lander (2002: 5-6).

cibido en el transcurso de estos años que su sociedad se ha venido convirtiendo en una de ricos y pobres, estos últimos con escasa posibilidad de movilidad y ascenso social (Briceño-León, 2000). El resentimiento social que esta situación ha generado ha sido, por lo demás, inevitable, si se recuerda que la democracia venezolana tuvo como promesa central promover mayores grados de equidad y justicia social (Coronil y Skurski, 1991; Crisp et al., 1996). El que esto no se cumpliera, resquebrajó fuertemente sus bases de legitimación, que se expresaría en los años noventa en el rechazo del electorado a los partidos del llamado Puntofijismo, Acción Democrática (AD) y el socialcristiano COPEI, en primer lugar, y ya para las elecciones de 1993 en el colapso del sistema bipartidista y el triunfo de Rafael Caldera como presidente⁵. Caldera fue apoyado por un amplio movimiento electoral, la *Convergencia Nacional* y un abanico diverso de pequeños partidos políticos (CENDES, 1995; Sanoja Hernández, 1998). Serán el fracaso del gobierno de Caldera en superar las dificultades económicas y su inconsecuencia con la promesa electoral tanto de forjar un modelo económico alternativo al neoliberalismo como de adelantar una reforma constitucional que mejorara y profundizara la democracia, los factores que, combinados con el descenso abrupto de los precios del barril petrolero en el mercado internacional en 1998, empujaron a los venezolanos a la radicalización en política: el comandante Hugo Chávez Frías, principal responsable del golpe de Estado fracasado de febrero de 1992, ganó la Presidencia con uno de los más altos porcentajes de votos válidos obtenidos por un candidato presidencial desde 1958 (56,4%) (López Maya y Lander, 1999). En 2000 ratificó su mandato con el porcentaje más alto en la historia electoral por '58: 59,8%.

EL GOLPE DE ESTADO DEL 11 DE ABRIL

A fines de 2001, las fuerzas sociales y políticas que desde la campaña electoral de 1998 se habían opuesto al proyecto político *bolivariano*, realizaron su primera protesta masiva y exitosa conocida como el *paro cívico* del 10 de diciembre. A partir de entonces comenzaría una espiral de confrontación entre estas fuerzas y el gobierno que con sus altibajos se mantiene hasta la fecha. El paro cívico logró paralizar una parte significativa del comercio urbano, y tuvo el efecto de unir un conjunto de fuerzas de la oposición que hasta ese momento se movían dispersa y fragmentadamente en el espacio político (López Maya, 2002b). El paro fue convocado por FEDECÁMARAS, la principal organización de asociaciones empresariales venezolanas. De él emergería como la cabeza

⁵ Rafael Caldera fue el fundador del partido COPEI, pero para esas elecciones se separó de su partido y lo confrontó electoralmente.

de la oposición el presidente de esa confederación empresarial, Pedro Carmona Estanga⁶.

Un conjunto de factores hicieron posible el éxito del paro cívico de diciembre. En primer lugar, convocó a los grupos descontentos –en Venezuela, pero también en el exterior– con los contenidos de naturaleza nacionalista de la nueva Carta Magna, que se oponían al proyecto político del presidente Chávez desde que este hiciera su primera campaña electoral en 1998. Inversionistas y la gran mayoría de los grupos económicos venezolanos, vinculados al capital transnacional, rechazaban el regreso a un Estado con capacidad reguladora de la vida económica y social, la reafirmación de la propiedad estatal del recurso petrolero, el derecho de los trabajadores a prestaciones sociales, entre otros aspectos que fueron reafirmados o incluidos en la Constitución de 1999. Cuando en noviembre de 2001 el gobierno, haciendo uso de facultades extraordinarias conferidas por la Asamblea Nacional, dio un paso más en la consolidación de líneas estratégicas de su proyecto sociopolítico, aprobando por ley Habilitante la ley de Tierras, la ley de Hidrocarburos y la ley de Pesca, con las cuales profundizaba en procesos de regularización de la propiedad privada así como en actividades económicas claves como la petrolera, estas fuerzas, que ya estaban movilizadas desde mediados de año, comenzaron a desarrollar una estrategia sostenida de resistencia y confrontación.

Además de estos intereses, que se sintieron amenazados por la Constitución y las leyes medulares del proyecto bolivariano aprobadas en noviembre, el gobierno también contribuyó a crear significativas tensiones con otros actores, debido a una conducción política con muchos errores y en algunos aspectos claramente autoritaria (Parker, 2002). Al aprobar leyes importantes sin difundir y ampliar los espacios para la participación y el debate, el gobierno hizo aparecer como justa la indignación de quienes se sentían afectados, sin crear las condiciones para que quienes se beneficiaban de tales leyes pudieran enterarse de su contenido y así, defenderlas. Es de señalar que este modo de aprobar leyes de gran potencial de cambio para la sociedad contradecía el contenido de democracia participativa respaldada por las fuerzas del gobierno en la Constitución recién sancionada. A esto se añadía el hecho de que, a lo largo de los meses de 2001, el gobierno fue confrontado, por diversos motivos, con otros sectores sociales y políticos, como el sindicalismo tradicional de la CTV (Ellner, 2003a), sectores de la educación privada y religiosa a los cuales quiso imponer una nueva ley de Educación, sectores mediáticos que se oponían a cualquier regulación de los medios de comunicación, y aliados políticos como el partido MAS y el alcalde mayor de Caracas, lo

⁶ En lo que sigue referido al paro cívico se toman extractos de López Maya (2002b).

que facilitó la convergencia de las hasta entonces fragmentadas fuerzas de la oposición en una sola plataforma política. Con el éxito del paro cívico del 10 de diciembre, esta plataforma se fortaleció.

Las reacciones tanto del gobierno como de la oposición al éxito político del paro cívico probarían ser catastróficas para la democracia venezolana en los meses siguientes. La oposición unida y fortalecida, reconociendo el liderazgo del empresario Carmona, se cerró a las negociaciones con el gobierno y exigió la derogación de todas las leyes aprobadas mediante la ley Habilitante (49 en total). Algunos grupos ya demandaban la renuncia del presidente Chávez. El gobierno, por su parte, endureció aún más las posiciones que había sostenido antes del paro, negándose a modificar o ceder en ninguna de sus leyes; amenazó con cerrar la Asamblea si perdía la mayoría parlamentaria y con promulgar una ley de medios de comunicación que limitara la actividad de los medios privados. Su partido dejó saber que cualquier diputado propio que negociara con la oposición sería expulsado. Con estas posiciones de oposición y gobierno, una salida institucional a la creciente confrontación se fue haciendo improbable.

Por ello, los primeros meses de 2002 fueron de agitada e intensa actividad política. A propósito de la fecha del 23 de enero, aniversario de la caída del dictador Pérez Jiménez, la oposición organizó, en nombre de la democracia, una marcha multitudinaria que fue respondida por una contramarcha de los simpatizantes del gobierno (*El Universal*, 2002; *El Nacional*, 2002a). Algo similar ocurrió con la fecha del 4 de febrero, aniversario del fallido golpe de 1992 que comandó Chávez, cuando la nutrida marcha del gobierno en Caracas fue respondida con un *luto activo* y marchas en distintas ciudades por parte de la CD (*El Nacional*, 2002b). Fue en estos meses cuando se inició la febril actividad marchista en el país, que se extendió a todo el año 2002 y sólo cedió paulatinamente después del paro petrolero. Mes tras mes, cada marcha de la oposición fue respondida por una contramarcha de los simpatizantes del gobierno. Las clases medias y altas bajo el liderazgo de FEDECÁMARAS y de la CTV (la confederación sindical más importante del país)⁷, comenzaron a disputarse la calle con los sectores populares liderados por el presidente y sus fuerzas sociales y políticas (PROVEA, 2002b; 2003).

7 La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) reúne a un grupo de sindicatos, principalmente del sector público. Sus bases, además de muy reducidas numéricamente, son trabajadores del sector formal, hoy en día privilegiados respecto a la mayoría de la población económicamente activa que es desempleada o pertenece al sector informal. En 2003, luego del fracaso de la huelga general, un grupo de importantes sindicatos se separó de la CTV y formó una nueva confederación, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), ver Ellner (2003b).

Los hilos que conducirán al golpe de Estado del 11 de abril se fueron tejiendo en esta sostenida política de la calle⁸. El ovillo comenzó a desenrollarse a partir del nombramiento, en febrero, de una nueva directiva de PDVSA por parte del Ejecutivo Nacional. La gerencia mayor de esta empresa estatal rechazó algunas de las designaciones, argumentando que no se respetaban los tradicionales *méritos* para tal ascenso. Sin embargo, tras el argumento de la *meritocracia* se escondían otros motivos.

Dentro de la lucha hegemónica planteada entre gobierno y oposición se encuentran dos posiciones antagónicas con respecto al rol de la industria petrolera en el futuro de la sociedad. Por una parte, entre las fuerzas que apoyan a la CD, existe un proyecto para la industria pensado desde la gerencia, y respaldado por actores políticamente predominantes dentro de la misma Coordinadora, según el cual la industria debe independizarse del control estatal para ser dirigida por sus altos gerentes. La política de *apertura petrolera*, desarrollada en Venezuela en los años noventa, respondía a este proyecto y ha sido recogida en estos años en diversos documentos de la CD, en especial en uno difundido durante el paro petrolero en enero de 2003 (CD, 2003). En esta propuesta se priorizan los aumentos de volúmenes de producción sobre precios, con lo cual se contradice abiertamente la estrategia de la OPEP, se disminuye el ingreso fiscal petrolero y se propende a una gradual privatización de la industria. En el proyecto de Chávez y su alianza de fuerzas, por el contrario, la Constitución y las leyes aprobadas en 1999 y 2001 (de Hidrocarburos Gaseosos e Hidrocarburos Líquidos respectivamente) revirtieron la política de apertura, reasegurando el control estatal sobre la industria, privilegiando los pagos de regalías sobre los pagos de impuestos a las ganancias (lo que beneficia al ingreso fiscal) y desarrollando una política de aumentos de precios sobre volúmenes de producción, lo que acercaba de nuevo al país a las estrategias de la OPEP (Lander, 2003). Por estas razones, el paro de empleados petroleros que estalló antes del golpe de Estado, si bien se hacía en nombre de la falta de *méritos* de los designados, escondía un asunto de la mayor trascendencia en la lucha hegemónica: ¿quién habría de dictar la pauta de la política petrolera en el futuro? ¿El Estado o la alta gerencia de la compañía?

El 9 de abril la CTV, en solidaridad con el paro de los trabajadores de PDVSA, llamó a un paro laboral general de 24 horas. Ese paro contó con el explícito apoyo de FEDECÁMARAS, la iglesia católica re-

8 Para una descripción más detallada del golpe de Estado del 11 de abril de 2002 ver López Maya (2002a; 2003b). Para la insurrección de la gerencia de PDVSA ver Lander (2003). Aquí se toman extractos de esos trabajos para resaltar aspectos reveladores de la lucha hegemónica.

presentada en el episcopado venezolano y organizaciones sociales y políticas de oposición. Pasadas las 24 horas, y aunque el paro estuvo lejos de obtener la contundencia del realizado el 10 de diciembre anterior, la CTV prorrogó por 24 horas más esta huelga. Al día siguiente, y sin que todavía se le viera a dicho paro suficiente fuerza, Carlos Ortega, presidente de la CTV, llamó a la huelga general indefinida y convocó para el día siguiente a una marcha que partiría del Parque del Este, en el este de Caracas, y terminaría en el edificio de PDVSA en Chuao, también en el este de la ciudad.

La nutrida marcha de la oposición se inició el 11 de abril hacia las 10 de la mañana e hizo su recorrido anunciado. Pero al mediodía, al llegar al edificio de PDVSA en Chuao, los convocantes, animados por las dimensiones de la marcha, decidieron arengar a las multitudes para que se dirigiesen al Palacio Presidencial de Miraflores para, como lo señaló el dirigente cetevista Carlos Ortega, *sacar a Chávez*. La marcha, el mensaje y la convocatoria a Miraflores fueron profusamente informados, convocados y cubiertos por los canales privados de televisión, que de esta manera hicieron explícito su apoyo político. De manera que la marcha fue creciendo en la medida en que iba hacia el centro de Caracas. Como quien convoca a un concierto o a una fiesta pop, los canales de televisión pasaban de manera gratuita y continua mensajes para que todos los venezolanos concurrieran a esta acción de naturaleza insurreccional⁹. Porque esta marcha tenía evidentes rasgos de sublevación: se estaba haciendo sorpresivamente y sin notificación alguna dentro de una huelga general indefinida.

El Palacio de Miraflores, ubicado en el oeste de la capital, estaba rodeado de civiles simpatizantes del gobierno que allí hacían vigilia protegiendo al presidente desde el 9 de abril, cuando la CTV anunció el primer paro de 24 horas. Mientras la marcha de la oposición avanzaba, el gobierno buscaba una estrategia para superar la confrontación. Su partido hacía llamados a toda su militancia para que rodearan y protegieran el Palacio. El presidente encadenó, a las 3.45 p.m., los medios de comunicación y se dirigió al país buscando ejercer algún control sobre los acontecimientos, mientras las multitudes seguían agolpándose alrededor del Palacio y la marcha opositora creciendo en su camino para sacar a Chávez. La Guardia Nacional rodeó la sede de gobierno, pero al llegar la marcha al centro de Caracas alguien hizo el primer disparo. Los medios pasarían ese y los días siguientes, una y cien veces, lo que ellos dicen fueron francotiradores chavistas que masacraban a civiles

9 Los canales privados de televisión transmitieron los mensajes bajo la figura de donación. En 2004 el Estado exigió el pago de los tributos que estos medios adeudan por este concepto y que alcanzan cerca de 3 millones de dólares (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria-SENIAT en Últimas Noticias, 2004c).

antichavistas en puente Llaguno, cerca del Palacio. Esto, que resultó ser una manipulación de imágenes por parte de los medios privados, sirvió de justificación para el golpe de Estado¹⁰. Pocas horas después, entre las 6 y 10 de la noche, aparecieron por los medios de comunicación los pronunciamientos militares de desobediencia, y a las 4.00 a.m. del día 12, Chávez salió con su escolta de Miraflores para entregarse en el Fuerte Tiuna.

Como es sabido, el día 13 se estableció un gobierno de facto, el cual fue derrocado 48 horas después por otra insurrección civil y militar que repuso a Chávez en el poder. Los conflictos en el interior de la alianza que derrocó su gobierno, las torpezas del presidente del gobierno de facto, Carmona Estanga, quien en su primer decreto abolió todos los poderes públicos, y un sorprendente y masivo levantamiento popular volteó el juego y los militares se reagruparon en torno al gobierno caído. A las 3.30 a.m. del 14 de abril Chávez regresó al Palacio Presidencial en un final de película, con las multitudes que lo aguardaban y las cámaras que transmitían las imágenes al mundo. Pocos minutos después se dirigió a la nación, pidió perdón por sus errores y prometió rectificación y reconciliación.

Si bien la confrontación política desarrollada en este episodio pareció resolverse a favor de las fuerzas del gobierno, no fue un resultado político claro en lo inmediato lo que condicionó la estrategia gubernamental de los meses siguientes. El gobierno se percibió debilitado por su fugaz caída y buscó fortalecerse política e institucionalmente. Reorganizó la Fuerza Armada para aislar y/o retirar a los militares insurrectos. En esto fue bastante exitoso, como se evidencia en la conducta de esta institución en los episodios insurreccionales siguientes. A diferencia de su accionar después del 10 de diciembre, el gobierno optó ahora, en lo político, por una estrategia de apertura con los actores de oposición. Cambió el gabinete ejecutivo, en especial a los ministros de la economía, buscando hacerlos más receptivos a los sectores económicos que lo habían derrocado; buscó asimismo una conciliación con los gerentes de la industria petrolera, manteniéndolos en sus puestos de trabajo y cambiando la directiva que habían rechazado. El gobierno también invitó a diversas organizaciones y personalidades internacionales al país con el fin de ayudar en la construcción de puentes para el diálogo con

10 Puede verse en el video *La revolución no será televisada* (Bartley y O'Brian, 2003), en un paneo de la cámara, que los hombres que disparaban en puente Llaguno lo hacían contra policías metropolitanos que los estaban tiroteando y no contra civiles. Defendían a los civiles chavistas que estaban desarmados en el puente. Estos hombres demostraron su inocencia y fueron absueltos en 2003. Al año siguiente, otro video, *Puente Llaguno. Las claves de una masacre* (Palacios, 2004), demostró con profusa documentación audiovisual la manipulación mediática ocurrida ese día con los sucesos en puente Llaguno.

sus oponentes (López Maya, 2002b). Sostuvo también, como respuesta a la agresiva e intensa movilización de calle de la oposición, una continua movilización de sus bases. Entre abril y diciembre, mes en el cual estalló el cuarto paro general, el 11 de cada mes –recordando la fecha del golpe– la CD convocaba a una marcha multitudinaria, que era respondida a su vez, el día 13, por otra marcha multitudinaria por parte de las bases bolivarianas. Estas movilizaciones evidenciaban un creciente uso de la violencia por parte de ambos adversarios políticos.

El cambio de estrategia del gobierno no surtió efecto sobre las fuerzas opositoras. Estas, después de las primeras semanas del golpe, donde reinó entre ellas el desconcierto y las tensiones internas, se fueron reagrupando de nuevo y cerrándose crecientemente al diálogo y la negociación con el gobierno, para caer una vez más –a fines de año– en una estrategia insurreccional, esta vez de consecuencias devastadoras en lo económico para el país.

HUELGA GENERAL Y PARALIZACIÓN DE PDVSA

Un conjunto de acontecimientos y procesos se fueron entretejiendo después del golpe, que en diciembre llevaron a las fuerzas de la oposición al mismo camino insurreccional transitado en abril. Cabe mencionar, por su relevancia en hacer atractiva una nueva estrategia insurreccional, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictada el 13 de agosto, donde se estableció que no existían méritos para enjuiciar por rebelión militar a cuatro altos oficiales, responsables del golpe de abril. Fue esta una clara decisión política y no jurídica del máximo tribunal, que abrió la puerta para una nueva aventura militar¹¹. Para el mundo civil fue señal de que en el país reinaba la impunidad. En relación directa con esta decisión, el 22 de octubre, catorce militares, entre ellos algunos de los absueltos por el TSJ en agosto, tomaron la plaza Francia de Altamira, en el este de Caracas, pronunciándose en *desobediencia legítima* contra el gobierno y declarando la zona *territorio liberado*. Anunciaron que sólo abandonarían la plaza cuando cayera Chávez y llamaban a sus compañeros de armas a alzarse contra el gobierno. Este suceso así como otros violentos y de gran confrontación serían permanentemente transmitidos y/o difundidos por los medios de comunicación privados, con lo cual estos mostraban no sólo su apoyo a estas estrategias, sino

11 La organización de derechos humanos PROVEA emitió un comunicado el mismo 14 de agosto poco antes de que se hiciera público el dictamen, censurando la decisión que se veía venir y desarrollando los antecedentes que llevaron a la misma. Concluyó PROVEA: “Negar la posibilidad de un juicio cuando es pública y notoria la existencia de indicios de comisión del delito de rebelión militar sería un acto de impunidad de suma gravedad, sólo explicable por la politización del TSJ del cual, como hemos dicho, el oficialismo es uno de sus principales responsables” (PROVEA, 2002a).

que también contribuían a sostener e incrementar un clima de alta tensión y conflictividad política.

Otro evento es el tercer paro cívico de la oposición, desarrollado justo el día antes del levantamiento militar de Altamira, convocado por la CD con el objetivo de forzar la renuncia de Chávez y/o obligarlo a convocar a unas elecciones adelantadas. A inicios de noviembre, sin que el gobierno hubiese podido encontrar una estrategia para controlar y/o detener a los militares de plaza Altamira, las tensiones se agudizaron con un encuentro violento en el centro de Caracas entre allegados del gobierno y de la oposición, motivado por la solicitud de un referendo consultivo por parte de la CD, referendo que las fuerzas oficialistas consideraban una manera tramposa de forzar un referendo revocatorio contra el presidente. Poco después, al allanarse la casa de un ex canciller de AD, se develó también la marcha de una conspiración. A mediados del mes, se produjo una balacera en la plaza Bolívar de Caracas entre policías metropolitanos y la Guardia Nacional, motivada por la politización que habían venido sufriendo los cuerpos de seguridad. Allí murieron tres personas. Poco después, el Ejecutivo Nacional intervino la Policía Metropolitana, subordinada a la Alcaldía Mayor (bajo control de un alcalde de oposición), y ordenó la salida a la calle de la Guardia Nacional, controlada directamente por el Ejecutivo Nacional. En noviembre también estalló una crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que puso de relieve la politización y polarización de esa institución. El 2 de diciembre, con todo lo anterior a cuestas, comenzó el cuarto y más terrible paro de la oposición, el hoy conocido como *paro-sabotaje petrolero*.

Este paro mostró connotaciones distintas a los precedentes, al hacerse evidente que no sólo se sumaba el comercio y parte de la industria, o la gerencia administrativa de PDVSA, como en abril, sino también buena parte de la gerencia operativa y los capitanes de la Marina Mercante de PDVSA. Estos procedieron en pocos días a paralizar las actividades operativas de la compañía y prácticamente la totalidad de la flota de tanqueros de PDV Marina. El lunes 9 de diciembre, día en que las fuerzas de la oposición convirtieron el paro en *indefinido* hasta que *caiga* Chávez, en cadena oficial transmitida por todos los medios de comunicación audiovisual, el presidente de PDVSA, Alí Rodríguez Araque, reconoció que la compañía estaba virtualmente paralizada. En lo que sería un paso decisivo para conjurar la insurrección, Rodríguez Araque denunció el paro como un *sabotaje criminal*, convocando al pueblo a salir a la calle y rodear edificios, instalaciones y otros bienes de la empresa, a fin de apoyar al gobierno en su esfuerzo por presionar a la gerencia a levantar la paralización. En las semanas siguientes, el pueblo, efectivamente, salió a la calle a rescatar la industria. El conflicto petrolero tomó protagonismo, perdiendo otras acciones y sectores su visibilidad y/o centralidad.

Durante esta aguda confrontación política, que se prolongó por más de dos meses, muchos comercios cerraron, supermercados y bancos trabajaron a medio turno, y los colegios privados y parte de los públicos paralizaron sus actividades. Los venezolanos, aunque no contaban con gasolina con que transportarse (esta se fue agotando en diciembre), se mantenían en las calles con marchas y contramarchas que terminaban en violencia y aun muerte. La CD abolió las fiestas navideñas como símbolo del sacrificio necesario para alcanzar la *victoria final*, y las ciudades, especialmente Caracas, eran segregadas espacialmente entre *escuálidos* (partidarios de la oposición) y *chavistas* (López Maya, 2003a). Todas las noches había cacerolazos estruendosos en sectores de clase media y alta para exigir que Chávez renunciase. El 23 de enero de 2003, ya con claras señales de una derrota de la oposición, las fuerzas del gobierno llamaron a una marcha que fue multitudinaria, mientras sectores de clases medias y altas se escondían tras las rejas de sus casas y practicaban *planes de contingencia*, esperando lo que líderes irresponsables de la oposición llamaban el *asalto de las hordas chavistas* sobre las urbanizaciones de los sectores de mayores ingresos (García-Guadilla, 2003).

Pese a los muchos pronósticos que aseguraban que no había gobierno venezolano que aguantara un paro petrolero, el gobierno de Chávez y su alianza política sobrevivieron. El gobierno lentamente retomó el control sobre la empresa estatal, reactivando las diferentes operaciones y profundizando el proceso de reestructuración de la misma, que había intentado con escaso éxito desde el inicio de su gestión. Por otra parte, durante el paro nunca se produjeron los estallidos sociales o las masacres previstas por las fuerzas de oposición, ni hubo desabastecimiento alimentario significativo. Hacia mediados de febrero, la tendencia de control del gobierno sobre la industria se hizo clara y al finalizar el mes de marzo más de 18 mil gerentes y trabajadores de PDVSA habían sido despedidos por abandono del trabajo¹². La empresa había logrado rescatar todos sus tanqueros, se había iniciado el proceso de arranque de sus refinerías y las cifras de producción de barriles diarios se acercaban a la normalidad. Sin nunca ser decretado su final, el paro se fue disolviendo en febrero.

A diferencia del golpe de Estado, el paro petrolero produjo un resultado político más claro a favor de las fuerzas del gobierno. La rebelión de los altos eslabones de la cadena gerencial de PDVSA provocó su despido masivo por abandono del trabajo y, con ello, la reforma petrolera, propugnada por el gobierno con poco éxito desde que iniciara su período, encontró un terreno despejado para hacerse efectiva. Cerca de 18 mil trabajadores, en su mayoría ejecutivos, fueron despedidos de

12 Para más detalles y análisis del paro petrolero ver Luis E. Lander (2004).

la industria que empleaba unos 40 mil trabajadores en total. Al rescatar el Estado su capacidad de control sobre la industria, pudo convertirla en instrumento central de políticas económicas y sociales orientadas por el proyecto bolivariano. Por el contrario, el despido de los gerentes de PDVSA dejó sin una fuente de recursos materiales importante a las fuerzas de la CD y creó una alta tensión en el seno de ella.

Por otra parte, la devastación económica producida por la paralización de PDVSA y parte de la industria privada del país tuvo también efectos de debilitamiento de las bases sociales de la oposición, al producirse la quiebra de pequeñas y medianas industrias y comercios, así como un salto de las tasas de desempleo que en cuatro meses pasaron del 15,4 al 20,3%. El PIB cayó en el primer trimestre de 2003 un 27% (Rivas, 2003). Los empresarios medianos y grandes, incluidos los poderosos dueños de los medios de comunicación, perdieron millones de dólares tratando de derrocar infructuosamente al presidente. La industria petrolera, además, había sufrido un sabotaje a sus equipos e instalaciones. Tuberías dañadas, circuitos eléctricos deteriorados, archivos desaparecidos; lo más grave, su sistema automatizado de funcionamiento fue sustraído y se utilizaron computadoras remotas para impedir que el gobierno pudiera reactivarla. Por varios meses la industria fue operada total o parcialmente de manera manual y local con las naturales dificultades para llegar a sus niveles operativos normales. Por otra parte, el despido masivo de su gerencia como resultado de su conducta insurreccional fue un daño enorme, difícil de sobreestimar. A estas catástrofes económicas hay que añadir el deterioro de las ciudades que produjo el enfrentamiento territorializado en zonas de *chavistas* y *antichavistas*, en especial Caracas, que salieron de esta confrontación embasuradas, con calles y servicios dañados, *ghetizadas* espacialmente, y la población enferma de ira y miedo.

Adicionalmente, la Fuerza Armada, a diferencia de abril, se movió de manera más unida y cohesionada tras el objetivo de defender la industria petrolera, amenazada por las fuerzas de oposición y considerada parte intrínseca de la soberanía nacional. En este sentido, la CD y las fuerzas que la sostienen cometieron una equivocación al pensar que la situación de inestabilidad que el paro produciría fracturaría a los militares y facilitaría una intervención de estos para desplazar al presidente del poder. Al contrario, la amenaza a la soberanía produjo una respuesta institucional de defensa al Estado, y con ello, al gobierno de Chávez.

LOS MESES POST-PARO: HACIA EL PROCESO REVOCATORIO PRESIDENCIAL

El resultado político del paro cambió en los meses siguientes la correlación de las fuerzas y, con ello, el escenario político general del país. El año 2003 transcurrió en medio de confrontaciones verbales y me-

diáticas de las fuerzas opositoras y el gobierno, mientras se fueron delineando nuevas estrategias que probarían ser decisivas para la lucha hegemónica en 2004.

Por parte del gobierno y sus fuerzas, lo primero fue superar los efectos socioeconómicos inmediatos y funestos del paro-sabotaje de PDVSA. Entre otras medidas, impuso un control cambiario e implementó políticas de emergencia de abastecimiento alimentario y de gasolina para la población. En la medida en que el gobierno recuperaba control sobre el país, su estrategia se hacía multidimensional y compleja. Por un lado, continuó la reestructuración de PDVSA buscando consolidar el control que había obtenido sobre la industria, y con ello recuperar el ingreso fiscal petrolero. Dentro de la nueva concepción del rol de la industria, el gobierno también buscaba ahora ajustarla a criterios diferentes de productividad y eficiencia, más cónsonos con su estatus de empresa pública. Por otro lado, favorecida la nación por un alza sostenida del precio del barril petrolero en los mercados internacionales, hacia la segunda mitad del año, el gobierno reinició y/o comenzó a impulsar un conjunto de políticas económicas y sociales con el fin de reactivar el aparato productivo y responder a las múltiples demandas sociales de la población, en especial de aquella que con sostenida organización y movilización había defendido al gobierno frente a las fuerzas opositoras, y que provenía de sectores de extracción popular. En la medida en que se fueron desarrollando estas políticas, algunas de ellas conocidas como *las misiones*, el proyecto bolivariano comenzó a hacerse más nítido en ciertos aspectos que buscan concretar los objetivos de inclusión social y democracia participativa.

Entre las iniciativas sociales desarrolladas por el gobierno a partir del paro-sabotaje, que con el correr de los meses arrojarían grandes dividendos políticos para los actores del gobierno, caben señalar: a) la implementación de políticas de seguridad alimentaria para sectores pobres, como la política de distribución de alimentos a través de los llamados Mercal; b) la formulación de políticas de reactivación de la economía, como el impulso a la economía social a través de la regularización de tierras rurales y urbanas, las ruedas de negocios que usan el gasto público para fomentar el impulso a cooperativas y pequeñas empresas; políticas de financiamiento a microempresas; un plan concebido para combatir el desempleo, pero que fue complejizándose para delinear una especie de economía alternativa que el gobierno llamó *modelo de desarrollo endógeno*. Este plan, conocido como Misión Vuelvan Caracas, articula programas de capacitación para el trabajo, otorgamiento de activos pertenecientes al Estado, asistencia técnica, entrega de viviendas, tierras, etc; c) el plan masivo de alfabetización (Misión Robinson I y II); d) los distintos planes educativos (escuelas bolivarianas, Misión Ribas, Misión Sucre, Universidad Bolivariana); y e) el plan de asistencia médica en los

barrios urbanos (Plan y luego Misión Barrio Adentro)¹³. Sólo el tiempo dirá si estas políticas tan necesarias están bien concebidas para cumplir de manera sostenida con los objetivos que se han propuesto. Pero indican que el gobierno perseguía proyectar la imagen del gobernante volcado a gobernar, atendiendo los reclamos y necesidades de los sectores más excluidos en el pasado, que lo han sostenido en las dificultades. Esta estrategia resultó, desde inicios de 2004, en un creciente ensanchamiento del apoyo político al gobierno, reconocido incluso en encuestadoras políticamente sesgadas hacia la oposición (para encuestas ver Keller, 2004 y para política social ver López Maya, 2004b).

Las fuerzas de la oposición, por su parte, debilitadas como ya se señaló, bajaron la movilización de calle y, desde febrero de 2003, se volcaron a la estrategia de activar un referendo revocatorio presidencial, buscando con ello dejar a un lado el paro petrolero sin levantarlo explícitamente. Esperaban disminuir los previsibles costos políticos negativos que la derrota del paro tenía, pasando sin transición a una nueva etapa en la lucha por salir de Chávez lo antes posible. Algunos grupos, sin embargo, siguieron enfrascados en sacar violentamente al presidente del poder. Por ejemplo, el eufemísticamente llamado Bloque Democrático y ciertas personalidades civiles y militares, como es el caso del ex presidente Carlos Andrés Pérez, que siguieron llamando al golpe de Estado y aun al magnicidio. Estas acciones se realizaban sin el respaldo explícito de la CD que se centró en el *revocatorio*, estrategia que se ajustaba a la Constitución, y que sólo un año antes había rechazado. Como actividad complementaria, la oposición también constituyó una comisión con el propósito de elaborar por consenso un documento que expresara las líneas básicas de un proyecto político para el gobierno de *transición* que, suponían, vendría inmediatamente después del revocatorio. Los líderes de la CD consideraban inminente la salida de Chávez, pues pese a los fracasos de sus estrategias insurreccionales, siguieron en la cuestionable creencia de que contaban con el apoyo mayoritario de los electores. Desconfiaban, sin embargo, de la voluntad del gobierno para dejarlos actuar democráticamente, reiterando contra este las acusaciones de *tiranía* y *dictadura* con que lo caracterizaban.

El referendo revocatorio asumido en estos meses por la CD es un derecho constitucional. El artículo 72 estipula su realización cumpliendo los siguientes requisitos: a) debe haberse cumplido la mitad del mandato de la autoridad; b) la solicitud debe estar respaldada como mínimo por un 20% de firmas de los electores inscritos en el Registro Electoral

13 La información cuantitativa y los análisis sobre estas políticas son escasos y básicamente provienen de fuentes oficiales. Pueden verse, entre otros, artículos breves del semanario económico *Quantum*, artículos aparecidos en la revista mensual *Question*, y páginas web del sector oficial como <www.barrioadentro.gov.ve> y <www.misionrobinson.gov.ve>.

Permanente; c) cuando se haga el escrutinio, el número de electores que se pronuncian a favor de revocar el mandato debe ser superior al número de votantes que eligieron a la autoridad en cuestión; d) deben votar por lo menos el 25% de los electores inscritos en el REP; y e) sólo puede hacerse una vez. Poco antes de finalizar el año 2003, luego de que pudo aprobarse la designación de las nuevas autoridades del CNE, esta vía se despejó y el ente comicial autorizó y reguló los llamados para recoger las firmas del revocatorio presidencial, así como también las firmas de revocatorios para diputados de la Asamblea Nacional, tanto oficialistas como de oposición. La recolección de las firmas tanto de las fuerzas del gobierno como de la oposición tuvo lugar en dos semanas seguidas de noviembre y diciembre. El año 2003 cerraba con discreto optimismo.

GUARIMBAZO Y REVOCATORIO PRESIDENCIAL

El 24 de febrero de 2004 se dio a conocer la primera decisión del CNE relativa a las firmas entregadas en diciembre de 2003 por la oposición para convocar el referendo revocatorio presidencial. El CNE, en decisión dividida 3 a 2, puso bajo observación a más de 148.190 planillas entregadas (contentivas de aproximadamente 1.480.000 firmas), anunciando en los días inmediatos siguientes la aprobación del procedimiento para llevarlas a *reparo* (ratificación). El CNE expresó una duda *razonable* sobre la autenticidad de una porción de solicitudes de las planillas que fueron llenadas con una caligrafía similar contradiciendo el instructivo acordado por el ente (*Últimas Noticias*, 2004a). Con ello posponía la decisión sobre una convocatoria a referendo revocatorio presidencial y lo condicionaba a una ratificación de firmas bajo observación para alcanzar el número necesario, pues las reconocidas como válidas eran insuficientes. Esto fue interpretado por algunos dirigentes y grupos de la CD como una *trampa*, que de hecho implicaba la suspensión del referendo presidencial. No obstante, el 2 de marzo, el CNE informó formalmente las cifras de solicitudes válidas, inválidas y *reparables*, y estableció los criterios para la reparación. Esta decisión fue respaldada por los observadores de la OEA y del Centro Carter en el país, quienes, sin embargo, expresaron diferencias con los criterios del CNE para la reparación y lo exhortaron a seguir negociando con las partes (ver Jaramillo y McCoy en *Últimas Noticias*, 2004b).

A raíz de estas decisiones tomadas por el CNE, entre el 27 de febrero y el 4 de marzo el país urbano, y sobre todo las zonas donde se residen sectores sociales de ingresos medios y altos, sufrió una ola de protestas confrontacionales y violentas, desarrolladas a partir de llamados a la *desobediencia civil* por parte de voceros de la CD, que rechazaron la decisión del CNE y expresaron desconocer la legitimidad del ente comicial (APORREA, 2004). Las protestas, conocidas como el

guarimbazo, incluyeron barricadas en autopistas y vías neurálgicas de Caracas y otras ciudades, quema de neumáticos, bolsas de basura y vehículos, balaceras en plaza Altamira, violencia física y verbal en diversos puntos urbanos, confinamiento de centenares de familias a sus hogares por los cierres de vía que impidieron llevar a los niños a las escuelas, acudir al trabajo, o llegar a centros de salud¹⁴. El saldo trágico de este nuevo evento incluyó nueve muertos, decenas de heridos, unos cuarenta revoltosos con autos de detención, que en los días siguientes fueron liberados, y millones en pérdidas materiales (PROVEA, 2004). Ninguna organización política, ni siquiera la CD, se responsabilizó por la violencia desatada, pero autoridades de municipios caraqueños controlados por la oposición se resistieron a reprimir tales protestas, argumentando que eran legítimas (López Maya, 2004b).

El efecto inmediato de esta violencia fue acentuar las tensiones en el seno de la CD, entre quienes se pronunciaban por rechazar el proceso de reparo y retirarse de la vía del referendo, y quienes insistieron, pese a las dificultades, en proseguir por este camino. Entre los primeros destacaban partidos como Primero Justicia, Proyecto Venezuela o La Causa R, y organizaciones radicales como Gente de Petróleo. Entre los segundos, organizaciones como el MAS, AD y COPEI, y personalidades como Teodoro Petkoff y Alberto Quirós Corradi. Esta última posición prevalecería luego de mucho debate. La oposición se avino a convocar a sus bases para *reparar* sus firmas, se realizó sin incidentes el acto de reparación, y el 3 de junio el CNE dictaminó que existían las firmas suficientes y se habían llenado los requisitos constitucionales para convocar al referendo revocatorio presidencial, que fijó para el 15 de agosto.

El proceso que llevó a la activación del revocatorio presidencial significó para la oposición un triunfo político, en especial para sectores y personalidades de vocación más democráticas ya señaladas arriba, que hasta ese momento habían tenido poco peso dentro de la CD. De hecho, la visibilidad de estos actores significó durante la campaña un cambio de voceros en la CD, con más visibilidad de discursos moderados, incluso por parte de quienes hasta poco antes se habían opuesto a ir a los reparos.

Por parte de las organizaciones y bases del gobierno, en las horas previas e inmediatamente siguientes al anuncio del CNE, se hicieron evidentes tensiones y contradicciones internas e incluso se vivieron estallidos de violencia política en el centro de la ciudad. La situación

14 Estos sucesos fueron conocidos posteriormente como operación guarimba o *guarimbazo* por su semejanza con un plan de resistencia civil con ese nombre, convocado desde mayo de 2003 a través de una red de Internet por un dirigente del partido Bloque Democrático, organización que se separó de la CD después del golpe de abril, por insistir en una salida violenta a la conflictividad política.

quedó rápidamente conjurada cuando el presidente Chávez, en una pensada, hábil y certera cadena oficial reconoció esa noche la decisión del CNE y convocó a sus bases a organizarse y prepararse para ese referendo. El presidente, desde el Palacio, rodeado de símbolos religiosos e históricos, atribuyó como su particular triunfo político la Constitución de 1999 y el referendo revocatorio presidencial que ahora se activaba contra él. Evocó luego la histórica batalla de Santa Inés de la Guerra Federal venezolana del siglo XIX, para explicar a sus bases la importancia del evento electoral que se aproximaba, la estrategia que estaría usando y presagiar la contundente victoria que buscaba. Finalmente, acudió a un muy famoso y emblemático poema llanero, “Florentino y el diablo”, identificándose él y su gobierno con Florentino y a la CD con el diablo, para dar la imagen más ilustrativa posible de la magnitud de la tarea que tenían por delante.

El 15 de agosto los electores venezolanos acudieron masivamente a las urnas en un clima de sana paz. Las previsiones logísticas del CNE quedaron rebasadas por la importante afluencia de la participación ciudadana. Si en julio de 2000 había votado un universo de cerca de 6.600.000 venezolanos, en agosto de 2004 votaron cerca de 10.000.000. Los centros electorales se vieron sobrepasados y la gente hizo colas que, en promedio, alcanzaron las 7 horas (*Últimas Noticias*, 2004d). El 16 de agosto en la madrugada, gracias al sistema computarizado de votación que se utilizó, el CNE pudo dar su primer informe oficial, totalizado con el 94,49% de las actas automatizadas y cuya tendencia consideró irreversible. La opción del NO, perteneciente al presidente, había triunfado con una holgada mayoría: 4.991.483 votos (58,25%) contra la opción del SI, que en este primer boletín recibiría 3.576.517 votos (41,74%) (*El Nacional*, 2004). Poco después, los observadores internacionales reconocidos por la oposición, el Centro Carter y la OEA, anunciaron la compatibilidad de sus cálculos con los resultados del CNE.

RECAPITULACIÓN Y COMENTARIOS FINALES

Desde que Hugo Chávez Frías tomara posesión de la Presidencia en febrero de 1999, la sociedad venezolana ha experimentado una modificación sustantiva de la lucha hegemónica precedente, al producirse el predominio político de actores portadores de un proyecto político alternativo al neoliberalismo. Este proyecto, conocido como *bolivariano*, comienza a materializarse primero en la Constitución de 1999 y luego en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 y otras leyes y normativas. Habiéndose intentado desarrollar en los lustros previos un proyecto político de orientación e intereses cercanos al neoliberalismo y a factores de poder hegemónicos en el mundo, este cambio generó una reacción de aguda conflictividad política. Entre fines de 2001 y hasta

la fecha de terminar este artículo, los actores opuestos al proyecto de Chávez y sus fuerzas sociales y políticas han buscado mediante estrategias de naturaleza principalmente insurreccional modificar a su favor la cristalización hegemónica ahora presente en el Estado.

En este artículo hemos señalado varios hitos de la lucha por los importantes cambios que se han producido en las relaciones de fuerza entre los actores. En primer término, el paro cívico del 10 de diciembre, liderado por los sectores empresariales organizados en FEDECÁMARAS. Esta confrontación dejó como saldo un triunfo político de la oposición, produciendo la cohesión de las fuerzas de esta bajo la CD, así como la emergencia del liderazgo del presidente de FEDECÁMARAS, Pedro Carmona Estanga. Luego del 10 de diciembre, tanto actores del gobierno como de la oposición se cerraron al diálogo y a la lucha de posiciones, preparándose el camino para una salida violenta de la conflictividad política.

La marcha masiva y el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, pese a la multiplicidad de actores de oposición que en ellos concurrieron y la visibilidad de la dirigencia de la CTV y sectores de la *sociedad civil* además de la empresarial, desembocaron de nuevo en el predominio político de los empresarios al producir un gobierno de facto de naturaleza plutocrática. Los intereses de estos sectores, en especial de dueños de medios de comunicación privada, de grupos militares de alto rango procedentes de varias fuerzas, de la alta jerarquía eclesiástica de la iglesia católica y de los altos ejecutivos de la empresa estatal PDVSA, hegemonizaron durante el fugaz gobierno de Carmona Estanga. Un contragolpe militar, impulsado y respaldado por masivas movilizaciones populares, revirtió esta momentánea correlación de fuerzas, restableciéndose el gobierno de Chávez. También contribuyó con este sorprendente cambio hegemónico la pasividad manifestada en esas horas por parte de actores civiles de la oposición que habían quedado excluidos de los arreglos del gobierno de facto (entre ellos partidos políticos, la CTV y las organizaciones sociales de sectores de ingresos medios). El regreso de Chávez significó un revés considerable para las fuerzas de oposición hegemónicas en la coalición de la CD. Sin embargo, gracias a los abundantes recursos mediáticos y materiales que aún les pertenecían, mantuvieron el liderazgo en ella. En los meses siguientes, a diferencia de diciembre, el gobierno buscó construir puentes de diálogo y negociación con algunos de los actores clave del golpe, como empresarios y gerentes de PDVSA, sin resultado. En la Fuerza Armada procedió a retirar las cabezas visibles del golpe y a recomponer los cuadros medios y altos.

El tercer hito, de nuevo abiertamente insurreccional, está constituido por la huelga general llamada por FEDECÁMARAS, la CTV y la CD en diciembre de 2002. Esta huelga tuvo su arma más poderosa

en el paro de la industria petrolera venezolana que, comandada por su gerencia ejecutiva y sus capitanes de la Marina Mercante, llegó a paralizar sus actividades casi de manera total. Emergieron durante este paro organizaciones como la CTV, Gente de Petróleo y UNAPETROL al lado de FEDECÁMARAS como líderes visibles del movimiento, sin excluir la permanente omnipresencia de los medios de comunicación privados que colonizaban a su favor la información de los acontecimientos, ni al grupo de militares alzados que tuvieron a la plaza Altamira como su *territorio liberado*. Los sectores de ingresos medios organizados (*sociedad civil*) apoyaron sostenidamente la huelga. Para inicios de febrero de 2003 esta fue controlada por los *bolivarianos*. El gobierno y sus fuerzas lograron recuperar el control sobre PDVSA y sus buques, prender las diversas instalaciones y se procedió al despido de casi la mitad de sus trabajadores, la mayoría pertenecientes a la nómina gerencial de la empresa. A partir de entonces, en las fuerzas de oposición se dejan ver más claramente las tensiones y conflictos internos, se desdibuja cualquier liderazgo significativo, se disminuyen recursos materiales por las pérdidas de recursos políticos y económicos ocasionadas por la derrota, y se debilitan las bases sociales por los efectos socioeconómicos nefastos derivados del paro. En contraste, el gobierno se recupera lentamente, se cohesiona la Fuerza Armada alrededor de él, el control de PDVSA facilita su reestructuración y auditoría. El gobierno, apoyándose en PDVSA, cambia sus estrategias para centrarse en el desarrollo de políticas sociales y económicas que permitan recuperar el crecimiento y avanzar en la inclusión y justicia social de sus bases.

Ante su debilidad política y material, la CD opta por una senda menos insurreccional y busca la activación del referendo revocatorio presidencial que está pautado en el artículo 72 de la Constitución de 1999. También robustece su estrategia de hacerse de apoyos internacionales para crear fuera del país una matriz de opinión que le sea favorable y que pueda eventualmente producir alguna intervención internacional para desalojar a Chávez del gobierno. Asimismo, elabora un programa político para la *transición* del gobierno de Chávez, cuya salida considera inminente. En el contexto del proceso para activar el referendo revocatorio se produce el *guarimbazo*, una nueva acción violenta propiciada por factores de la oposición. Fracasado también como estrategia para *tumbar* a Chávez, nadie toma responsabilidad por su desarrollo. El carácter errático del *guarimbazo*, el rechazo que produce, fortalece una vez más la lucha hegemónica a favor del gobierno. Sin embargo, torpezas de este en el manejo de la represión opacan el resultado.

Finalmente, en medio de diversas vicisitudes, se produce el referendo del 15 de agosto. Fue un éxito por la masiva participación que produjo y por los respaldos que recibió –nacional e internacionalmente– a lo largo de su puesta en escena. Tuvo en las desavenencias entre

los rectores del CNE y en el mal cálculo logístico que hizo esta institución sobre la esperada participación electoral sus puntos sombríos, al obligar esto último a largas colas, incomodidades y tensiones innecesarias. Sin embargo, al producir su resultado una holgada mayoría de votos por la opción del NO, representativa del presidente, reconocida por los observadores internacionales, la lucha hegemónica parece haber encontrado al fin una puerta para entrar al camino menos violento y más propicio para la construcción de consensos para un proyecto de sociedad compartido. Sin embargo, en los días en que se terminó este artículo, la CD había optado por no reconocer el triunfo, denunciar un *masivo fraude electrónico* y llamar a la movilización callejera, mientras sustanciaba con soportes su denuncia de fraude para formalizarla ante instancias nacionales e internacionales.

Si bien resulta difícil entrever a dónde llevará esta nueva acción de las fuerzas opositoras, no cabe duda de que la asumen dentro de una debilidad política muy marcada en relación a las acciones del pasado. Algunos sectores dentro de ellas, el caso más notorio de FEDECÁMARAS, prelados de la iglesia católica y ciertos medios de comunicación privados, han optado por reconocer, aunque sea momentáneamente, los resultados, pues se corresponden con tendencias señaladas por numerosas encuestas en las semanas previas al revocatorio, y han sido reconocidos por la OEA, el Centro Carter, numerosos gobiernos, incluyendo el de EE.UU. Así las cosas, podría en los próximos meses abrirse una nueva fase en la lucha hegemónica en Venezuela, menos marcada por estrategias de insurrección y violencia, y más dirigida a la búsqueda de construcción de espacios para una confrontación que reconozca al otro como legítimo adversario, y tienda puentes para trabajar por el consenso en políticas de futuro, o para el procesamiento de las diferencias irreductibles a través de los procedimientos democráticos.

BIBLIOGRAFÍA

- APORREA 2004 *Declaraciones de Enrique Mendoza el 25 de febrero* (Caracas: APORREA). En <<http://www.aporrea.org.ve>> acceso marzo de 2004.
- Bartley, Kim y O'Brian, Donnacha (dirs.) 2003 *La revolución no será televisada* (Irlanda) 73 minutos, Documental.
- Briceño-León, Roberto 2000 "Hilos que tejen la vida social" en Baptista, Asdrúbal (ed.) *Venezuela siglo XX. Visiones y testimonios* (Caracas: Fundación Polar) Vol. I.
- CENDES 1995 *El proceso electoral de 1993. Análisis de sus resultados* (Caracas: CENDES).

- Coordinadora Democrática (CD) 2003 *Agenda de Reconstrucción de la República de Venezuela* (Caracas). En <www.acuerdosocial.com>.
- Coronil, Fernando y Skurski, Julie 1991 "Dismembering and Remembering the Nation: The Politics of Violence in Venezuela" in *Comparative Studies in Society and History* (Cambridge University Press) Vol. 33, N° 2.
- Crisp, Brian et al. 1996 "The legitimacy problem" in McCoy, Jennifer et al. *Venezuelan Democracy under Stress* (New Brunswick: Transaction Publishers).
- El Nacional* 2002a (Caracas) 25 de enero.
- El Nacional* 2002b (Caracas) 5 de febrero.
- El Nacional* 2004 (Caracas) 16 de agosto.
- El Universal* 2002 (Caracas) 25 de enero.
- Ellner, Steve 2003a "El sindicalismo frente al desafío del chavismo" en Ellner, Steve y Hellinger, Daniel (eds.) *La política venezolana en la época de Chávez* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Ellner, Steve 2003b "Tendencias recientes en el movimiento laboral venezolano" en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) Vol. 9, N° 3.
- Ellner, Steve y Hellinger, Daniel (eds.) 2003 *La política venezolana en la época de Chávez* (Caracas: Nueva Sociedad).
- García-Guadilla, María Pilar 2003 "Politización y polarización de la sociedad civil venezolana: las dos caras frente a la democracia", Dallas-Texas. Ponencia presentada en XXIV Congreso de LASA, 27 al 29 de marzo.
- Keller, Alfredo 2004 *¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué puede pasar?* (Caracas: Alfredo Keller y Asoc.) en <www.alfredokeller.com>.
- Laclau, Ernesto 1985 "Tesis acerca de la forma hegemónica de la política" en Labastida, Julio y Campo, Martín del (coords.) *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina* (México: Siglo XXI).
- Lander, Edgardo 2002 "El papel del gobierno de EE.UU. en el golpe de Estado contra el presidente Chávez" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 7, junio.
- Lander, Edgardo 2004 "Venezuela, la búsqueda de un proyecto contrahegemónico" en *Question* (Caracas) Año 3, N° 25.
- Lander, Luis E. 2003 "Gobierno de Chávez. ¿Nuevos rumbos en la política petrolera venezolana?" en Lander, Luis E. (ed.) *Poder y petróleo en Venezuela* (Caracas: FACES-UCV/PDVSA).

- Lander, Luis E. 2004 "La insurrección de los gerentes: PDVSA y el gobierno de Chávez" en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) Vol. 10, N° 2.
- López Maya, Margarita 2002a "El golpe de Estado del 11 de abril y sus causas" en *Sociedad y Economía* (Cali) N° 3.
- López Maya, Margarita 2002b "Venezuela: el paro cívico del 10 de diciembre" en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 177.
- López Maya, Margarita 2003a "Las manifestaciones territoriales de la polarización" en *El Punto Medio* (Caracas) Año 2, N° 5.
- López Maya, Margarita 2003b "Venezuela después del golpe: una segunda insurgencia" en Medina, Medófilo y López Maya, Margarita *Venezuela: confrontación social y polarización política* (Bogotá: Aurora).
- López Maya, Margarita 2004a "Democracia participativa y políticas sociales. El caso de la Venezuela bolivariana". Exposición en el foro académico Ciudadanía, participación y conflicto en los Andes, patrocinado por Focal y FLACSO, Quito, 19 y 20 de febrero.
- López Maya, Margarita 2004b "Polarización y violencia en 2004: referendo y 'plan guarimba'", Caracas, mimeo.
- López Maya, Margarita 2004c "Venezuela 2002-2003: Konfrontation und Gewalt" en *Jahrbuch Lateinamerika Analysen und Berichte* (Berlín) N° 28.
- López Maya, Margarita y Lander, Luis 1999 "Triunfos en tiempos de transición" en *Cuestiones Políticas* (Caracas) N° 22.
- López Maya, Margarita y Lander, Luis 2000 "Ajuste, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela: 1984-1998" en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) Vol. 6, N° 3.
- OSAL 2001 (Buenos Aires: CLACSO) N° 3, enero.
- OSAL 2002 (Buenos Aires: CLACSO) N° 6, enero.
- Palacios, Ángel 2004 *Puente Llaguno. Las claves de una masacre* (Caracas) Documental.
- Parker, Dick 2002 "Debilidades en la conducción política del proceso también facilitaron el golpe" en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) N° 7, junio.
- PROVEA 2002a *Comunicado del 14 de agosto* (Caracas: PROVEA). En <<http://www.derechos.org.ve>> acceso 14 de agosto de 2002.
- PROVEA 2002b *Situación de los derechos humanos en Venezuela* (Caracas: PROVEA) octubre 2001-septiembre 2002.
- PROVEA 2003 *Situación de los derechos humanos en Venezuela* (Caracas: PROVEA) octubre 2002-septiembre 2003.
- PROVEA 2004 *Edición especial del 12 de marzo* (Caracas: PROVEA). En <<http://www.derechos.org.ve>> acceso marzo.

- Rey, Juan Carlos 2004 "La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de reconciliación" en *Revista de Estudios Políticos* (Madrid) N° 74.
- Rivas, Emilio P. 2003 "¿Milagro a la venezolana?" en *Question* (Caracas) Año 2, N° 19.
- Roberts, Kenneth 2003 "Polarización social y resurgimiento del populismo en Venezuela" en Ellner, Steve y Hellinger, Daniel (eds.) *La política venezolana en la época de Chávez* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Romero, Carlos et al. 2003 "La política exterior en las constituciones de 1961 y 1999: una visión comparada en sus principios, procedimientos y temas" en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Caracas, Vol. 9, N° 1.
- Sanoja Hernández, Jesús 1998 *Historia electoral de Venezuela 1810-1998* (Caracas: El Nacional).
- Stephany, Keta 2001 "Políticas de ajuste y protesta popular en Venezuela 1989 y 1996" (Caracas) Tesis de maestría en planificación, mención "Política Social", CENDES.
- Últimas Noticias* 2004a (Caracas) 25 de febrero.
- Últimas Noticias* 2004b (Caracas) 4 de marzo.
- Últimas Noticias* 2004c (Caracas) 20 de marzo.
- Últimas Noticias* 2004d (Caracas) 22 de agosto.